



RESOLUCIÓN N.º 4065

"POR LA CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN, SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

EL DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de sus facultades delegadas mediante la Resolución 3691 de 2009 de la Secretaría Distrital de Ambiente, Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, Decreto 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009, de conformidad con la Ley 99 de 1993, el Decreto 1594 de 1984, el Decreto 948 de 1995, la Resolución 619 de 1997 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Resolución 1208 de 2003, y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante queja identificada con radicado N° 2005ER24302 del 12 de julio de 2005, se denunció la contaminación atmosférica generada por el establecimiento denominado INDUSTRIAS LOBO, ubicado en la carrera 86 F N° 40 B – 18 sur de la Localidad de Kennedy de esta ciudad.

Que la Secretaría Distrital de Ambiente, en uso de las facultades conferidas mediante el Decreto Distrital N° 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009, al tenor del cual le corresponde realizar el seguimiento y control de las actividades que generan impacto en los recursos naturales en el Distrito Capital de Bogotá, y en atención a la queja presentadas, llevó a cabo visita técnica al predio citado, el día 8 de septiembre de 2005 con el fin de verificar el cumplimiento legal en materia de emisiones atmosféricas, de conformidad con la normatividad vigente.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo Técnico de la Oficina de Quejas y Soluciones de esta Secretaría, emitió el Concepto Técnico N° 7562 del 15 de septiembre de 2005, en el cual se expresó lo siguiente:

(...)

4. ANALISIS TECNICO



"Establecimiento donde se realiza corte y lijado de madera, no se realizan actividades de pintura. Funciona en el primer piso de una edificación de cuatro plantas en donde se tienen dos sierras, pulidora, sinfín y planeadora. Utilizan como materia prima el pino. La carpintería trabaja a puerta abierta, lo que permite que el material particulado sea arrastrado por el viento hacia otros lugares generando contaminación atmosférica."

Que como consecuencia del concepto mencionado, se expidió el requerimiento N° 2007EE819 del 18 de enero de 2007 en el que solicitó al representante legal de la carpintería realizara las acciones tendientes a implementar dispositivos de control que aseguraran la adecuada dispersión de gases, vapores, partículas u olores que generen molestias a los vecinos y transeúntes del sector, de igual forma se solicitó realizar el registro de su libro de operaciones ante esta entidad.

Que con el propósito de verificar el cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado requerimiento y en la normatividad ambiental vigente, se procedió a realizar visita de seguimiento el día 26 de junio de 2007, que dió lugar a la expedición del Concepto Técnico N° 6321 del 16 de julio de 2007, en el que se expresó lo siguiente:

"4. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

1. EMISIONES: *La ebanistería genera material particulado y no cuenta con sistemas para la captación y control de estas emisiones.*

2. LIBRO DE OPERACIONES: *la ebanistería no cuenta con registro del libro de operaciones de su actividad comercial ante el sector industrial forestal de la SDA, incumpliendo de esta forma lo establecido en los artículos 64 a 68 del Decreto 1791 de 1996."*

Que como consecuencia del concepto mencionado, se expidió un nuevo requerimiento N° 2007EE42547 del 28 de diciembre de 2007 en el que solicitó al representante legal de el establecimiento denominado INDUSTRIAS LOBO adelantara ante esta secretaria el tramite de registro del libro de operaciones e implementara dispositivos de control que aseguraran la adecuada captación y dispersión de los olores, vapores y emisiones producidas por la actividad desarrollada.

Que con el propósito de verificar el cumplimiento a este ultimo requerimiento que se expidió como consecuencia del cambio de razón social del establecimiento, se procedió a realizar visita de seguimiento el día 4 de mayo de 2008, que dió lugar a la expedición del Concepto Técnico N° 10252 del 17 de julio de 2008, en el que se expresó lo siguiente:

4.1 Situación Encontrada

Se realiza visita al lugar de verificación donde se pudo apreciar los siguientes aspectos:

Dicha microempresa realiza acciones como corte y lijado de madera, utilizando como materia prima el pino. El establecimiento realiza dichas actividades en un predio amplio produciendo emisiones de material particulado que es arrastrado por el viento hacia el exterior del mismo causando molestias a los vecinos y transeúntes.

No se evidenció la implementación de un dispositivo para la dispersión de este material particulado que puedan causar molestias a los vecinos y transeúntes del sector. Tampoco cuenta con el registro de operaciones de su actividad comercial para lo cual el propietario aduce no tener conocimiento de dicha exigencia."

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

Que una vez analizados los resultados consignados en los Conceptos Técnicos Nos. 7562 del 15 de septiembre de 2005, 6321 del 16 de julio de 2007 y 10252 del 17 de julio de 2008, se observó que el establecimiento denominado INDUSTRIAS LOBO, ubicado en la carrera 86 F N° 40 B – 18 sur de la Localidad de Kennedy, no cuenta con dispositivos de control que aseguren la adecuada captación y dispersión de los olores, vapores y emisiones producidas por la actividad desarrollada, así como tampoco cuenta con registro de su libro de operaciones ante esta Secretaría.

Que de acuerdo a lo encontrado en los referidos conceptos técnicos, es evidente que la afectación ambiental presentada por el establecimiento corresponde a una completa infracción al Artículo 23 del Decreto 948 de 1995 en el que se menciona la necesidad de que los establecimientos que puedan generar emisiones al aire, debían contar con ductos o dispositivos que aseguren la adecuada dispersión de los gases y vapores, con el propósito de evitar molestias a los vecinos y transeúntes del sector; para el caso que nos ocupa, no existen dispositivos de control que aseguren la adecuada captación y dispersión de los olores, vapores y emisiones producidas por la actividad desarrollada en el establecimiento mencionado, por lo que hay una latente afectación y un presunto incumplimiento a la disposición legal mencionada.

Que de igual manera, es posible determinar que no se realizó el registro del libro de operaciones tal como lo establecen los artículos 65 a 68 del Decreto 1791 de 1996 en el que se determina que las empresas que se dediquen a la transformación primaria de productos forestales, las de transformación secundaria de productos forestales o de productos terminados, las de comercialización

forestal, las de comercialización y transformación secundaria de productos forestales y las integradas deberán llevar un libro de operaciones, además, que el libro a que se hace referencia debe ser registrado ante la autoridad ambiental respectiva, en este caso la Secretaría Distrital de Ambiente.

Que dentro de las obligaciones a que se hace referencia en la citada norma se menciona la necesidad de presentar un informe anual de actividades ante la Secretaría por parte de las empresas anteriormente descritas. Y deben cumplir con las siguientes obligaciones:

"a) Abstenerse de adquirir y procesar productos forestales que no estén amparados con el respectivo salvoconducto;

b) Permitir a los funcionarios competentes de las entidades ambientales y administradoras del recurso y/o de las corporaciones la inspección de los libros de la contabilidad, de la manera y de las instalaciones del establecimiento;

c) Presentar informes anuales de actividades a la entidad ambiental competente."

Que por último estas industrias están en la obligación de exigir a los proveedores el salvoconducto que ampare la movilización de los productos.

Que con relación a lo anterior, los requerimientos Nos. 2007EE819 del 18 de enero de 2007 y 2007EE42547 del 28 de diciembre de 2007, le ordenaron al propietario del establecimiento denominado INDUSTRIAS LOBO adelantar ante esta Secretaría el trámite de registro del libro de operaciones e implementar dispositivos de control que aseguren la adecuada captación y dispersión de los olores, vapores y emisiones producidas por la actividad desarrollada en el mismo.

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso particular, este despacho se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, así como en algunos de los criterios expuestos por la Corte Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se indica a continuación:

Que de conformidad con el Artículo Octavo de la Carta Política es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el Artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra entre otras cosas, el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que a su vez, el Artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, el de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su Artículo 95, que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano, se encuentra el de la protección a los recursos naturales y culturales del país, además el de velar por la conservación de un ambiente sano.

Que por su parte el Artículo 66 de la Ley 99 de 1993, estableció que los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 83 de la Ley 99 de 1993, esta Entidad está investida de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la Ley, que sean aplicables según el caso.

Que a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del Artículo 107 de la Ley 99 de 1993, según el cual, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.

Que por su parte los Artículos 84 y 85 de la misma disposición legal, disponen, que cuando ocurriere violación de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de recursos naturales renovables, las autoridades ambientales, impondrán mediante acto administrativo motivado las sanciones y medidas preventivas, según el tipo de infracción y la gravedad de la misma.

Que el Parágrafo Tercero, establece que el procedimiento aplicable será el establecido en el Decreto 1594 de 1984 o que lo modifique o sustituya.

Que en la actualidad el Decreto 1594 de 1984, no ha sido modificado o revocado por normatividad alguna, por lo cual es el pertinente para adelantar las investigaciones respectivas en materia ambiental así como por el incumplimiento de las normas vigentes en la misma materia o de requerimientos en actuaciones jurídicas emanadas de las autoridades ambientales competentes.

Que conforme lo establece el Artículo 197 del Decreto 1594 de 1984, el procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud o información de funcionario público, por denuncia o queja presentada por cualquier persona, como consecuencia de haberse tomado previamente una medida preventiva o de seguridad.

Que de igual forma, establece el Artículo 202 del Decreto antes mencionado, que conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso, la autoridad ambiental debe ordenar la correspondiente investigación, para verificar los hechos o las omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.

Que el Artículo 203 ibídem, consagra que en orden a la verificación de los hechos u omisiones, podrán realizarse todas las diligencias que se consideren necesarias, tales como visitas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, pruebas químicas o de otra índole.

Que el Artículo 205 del Decreto 1594 de 1984 estipula que realizadas las anteriores diligencias, mediante notificación personal, se pondrán en conocimiento del presunto infractor los cargos que se le formulen. El presunto infractor podrá conocer y examinar el expediente de la investigación.

Que el Artículo 207 del Decreto 1594 de 1984 estipula que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación, el presunto infractor, directamente o por medio de apoderado, podrá presentar sus descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

Parágrafo: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas serán a cargo de quien las solicite.

Que mediante la expedición del Decreto N° 948 de 1995, se determinan los postulados en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.

Que mediante el Decreto 1791 de 1996 se estableció el régimen para el aprovechamiento forestal.

Que adicional a los anteriores fundamentos legales, es importante tener en cuenta los siguientes pronunciamientos de tipo jurisprudencial aplicables al caso en particular, así:

Que es de resaltar que la constitucionalización de la función ecológica de la propiedad, encuentra sus orígenes en los conceptos de función social (Arts. 58 y 333 C.P.), desarrollo sostenible (Art. 80 C. P. y 3 de la Ley 99 de 1993), y en el

principio de la solidaridad intergeneracional (Art. 3 de la Ley 99 de 1993), y es una de las expresiones de protección al medio ambiente que llevaron a determinar por parte de la doctrina y la jurisprudencia, que nuestra Carta contiene una verdadera "Constitución Ecológica":

"(...)

La Corte ha precisado que esta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación (CP Art. 8). De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales (CP Art. 79). Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares¹. Es más, en varias oportunidades, la Corte ha insistido en que la importancia del medio ambiente en la Constitución es tal que implica para el Estado, en materia ecológica, "unos deberes calificados de protección"². Igualmente, y conforme a lo señalado por los actores, la Corte también ha precisado que la Carta constitucionaliza uno de los conceptos más importantes del pensamiento ecológico moderno, a saber, la idea según la cual el desarrollo debe ser sostenible.

Ahora bien, en la época actual, se ha producido una "ecologización" de la propiedad privada, lo cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no sólo debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte (función social de la propiedad) sino que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo sostenible. Por ello el ordenamiento puede imponer incluso mayores restricciones a la apropiación de los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos, con lo cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes cambios.³ (Resaltados fuera de texto).

Que adicionalmente la Corte Constitucional en sentencia T-1527 de 2000, determinó:

"...Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los

¹ Ver, entre otras, las sentencias T-411 de 1992, C-058 de 1994, C-519 de 1994, C-495 de 1996 y C-535 de 1996.

² Ver, entre otras, las sentencias C-328 de 1995 y C-535 de 1996.

³ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 126 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

4 0 6 5

reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental. (...) Dentro de este contexto, en la preservación y protección del medio ambiente, los particulares tienen una especial responsabilidad, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa o la realización de una actividad económica amenacen derechos fundamentales, pues su ejercicio se limita al bien común..."

Que de conformidad con la Sentencia T-536 del 23 de septiembre de 1992, de la Sala Sexta de Revisión Corte Constitucional, con ponencia del Dr. Simón Rodríguez Rodríguez, fue reiterativa sobre el tema ambiental y el alcance del mismo a partir de la interpretación de la Constitución Política:

"...Síntesis: El ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho Constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencias, con el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos, garantizándoles su supervivencia. Existen unos límites tolerables de contaminación que al ser traspasados constituyen un perjuicio para el medio ambiente y la vida, que pueden ser justificables y por lo tanto exigen imponer unos correctivos..."

Que hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y legal, y teniendo en cuenta los resultados obrantes en los Conceptos Técnicos Nos. 7562 del 15 de septiembre de 2005, 6321 del 16 de julio de 2007 y 10252 del 17 de julio de 2008, emitidos por el grupo técnico de la Oficina de Quejas y Soluciones de esta Secretaría, y dando aplicación a lo establecido en el Artículo 197 del Decreto N° 1594 de 1984, este despacho encuentra pertinente abrir investigación ambiental y formular pliego de cargos, en contra del señor ORLANDO VASQUEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 19.054.336, en calidad de representante legal del establecimiento denominado INDUSTRIAS LOBO, ubicado en la carrera 86 F N° 40 B - 18 sur de la Localidad de Kennedy de esta ciudad, por su presunto incumplimiento al Artículo 23 del Decreto 948 de 1995 y los Artículos 65 a 68 del Decreto 1791 de 1996.

Que de otra parte, el Artículo 101 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Honorable Concejo de Bogotá, dispuso transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera; y en el literal c) del Artículo 103 ibídem se le delega la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital.



Que el artículo 8 del Decreto 109 de 2009, modificado por el artículo 1 del Decreto 175 de 2009, asignó al Secretario Distrital de ambiente, entre otras funciones, la de "...Emitir los actos administrativos para el otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones, licencias ambientales, salvoconductos de movilización y demás instrumentos de control y manejo ambiental, medidas preventivas y sanciones a que haya lugar."

Que en conclusión es obligación de la Secretaría Distrital de Ambiente por mandato superior, en ejercicio de la gestión fijada, mediante el cumplimiento de las funciones asignadas legalmente y en el ámbito de su competencia, hacer efectivos los mandatos constitucionales y legales dentro del marco del estado de derecho, el desarrollo sostenible y con el alcance que se le ha dado aún en contra de viejas posiciones sobre los derechos de propiedad y desarrollo.

Que mediante la Resolución 3691 de 2009, el Secretario Distrital de ambiente delegó en el Director de control Ambiental, entre otras, la función de "... expedir los actos administrativos de iniciación de trámite y/o investigación de carácter contravencional o sancionatorio, así como el de formulación de cargos y de pruebas...", así como los de expedir medidas preventivas y expedir los actos administrativos que decidan de fondo los procedimientos de carácter sancionatorio, al igual que los recursos que los resuelvan.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra del señor ORLANDO VASQUEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 19.054.336, en su calidad de representante legal del establecimiento denominado INDUSTRIAS LOBO, carrera 86 F N° 40 B – 18 sur de la Localidad de Kennedy de esta ciudad, por su presunto incumplimiento al Artículo 23 del Decreto 948 de 1995, a los Artículos 65, 66, 67 y 68 del Decreto 1791 de 1996 de conformidad con los requerimientos Nos. 2007EE819 del 18 de enero de 2007 y 2007EE42547 del 28 de diciembre de 2007.

ARTÍCULO SEGUNDO. Formular al señor **ORLANDO VASQUEZ**, el siguiente pliego de cargos:

CARGO PRIMERO. No haber implementar dispositivos de control que aseguraran la adecuada dispersión de gases, vapores, partículas u olores que generen por la actividad comercial que desarrolla el establecimiento denominado INDUSTRIAS LOBO, ubicado en la carrera 86 F N° 40 B – 18 sur de la Localidad de Kennedy de esta ciudad, incumpliendo presuntamente con lo establecido en el Artículo 23 del Decreto 948 de 1995.

CARGO SEGUNDO. No haber realizado el registro de su libro de operaciones ante esta Secretaría, incumpliendo presuntamente con esta conducta lo dispuesto en los Artículos 65, 66, 67 y 68 del Decreto 1791 de 1996.

ARTÍCULO TERCERO. De conformidad con el Artículo 207 del Decreto 1594 de 1984, el presunto infractor cuenta con diez (10) hábiles, contados a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los descargos por escrito, personalmente o por medio de apoderado y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y sean necesarias.

PARÁGRAFO PRIMERO. El propietario del establecimiento comercial deberá presentar, junto con los descargos, el certificado de matrícula mercantil de aquel y copia de la cedula de ciudadanía.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas serán a cargo de la parte solicitante.

ARTÍCULO CUARTO. Notificar el contenido de la presente providencia al señor **ORLANDO VASQUEZ** en su calidad de representante legal del establecimiento denominado INDUSTRIAS LOBO, carrera 86 F N° 40 B – 18 sur de la Localidad de Kennedy de esta Ciudad.

ARTÍCULO QUINTO. Remitir copia a la Alcaldía Local de Kennedy, para que el presente acto administrativo sea fijado en un lugar público de esa Entidad. Publicar igualmente la presente resolución en el boletín que para el efecto disponga la Secretaría Distrital de Ambiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 70 de la ley 99 1993

ARTÍCULO SEXTO. Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad a lo establecido en el Artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C a los 30 JUN 2009



EDGAR FERNANDO ERAZO CAMACHO

Director de Control Ambiental

Proyectó: Lissette Mendoza Téllez
Revisó: Julieta Franco
SDA-08-2008-2230